

Elementos para el estudio de la gobernanza local: reflexiones sobre la ciudad de México *

Mario Bassols Ricardez
Departamento de Sociología
UAM-Iztapalapa, México

I. Gobernabilidad y gobernanza

Hace poco más de veinte años comenzó a aparecer en la literatura sobre gestión urbana y gobiernos locales el concepto de gobernabilidad. De inspiración anglosajona, éste tuvo amplia difusión en sus diferentes acepciones, en el análisis político y urbano latinoamericano y aún hoy es de uso bastante generalizado. Como es sabido, la década de 1980 significó para buena parte de América Latina una época de estancamiento económico, inflación a niveles mayores al 100% anual, reajustes en el mercado laboral y fuga de capitales. En consecuencia, se erosionó la capacidad del Estado para mediar en los crecientes conflictos y surgieron fuerzas regionales que impulsaron la descentralización política y la desconcentración económica, hasta entonces mayormente localizada en las grandes ciudades. Parecía cobrar sentido el hablar de gobernabilidad para referirse a la capacidad de gobernar un territorio. Se hacía imperioso el administrar con eficacia y eficiencia los cada vez más escasos recursos públicos y se comenzaron a difundir diversas fórmulas y prácticas de “buen gobierno”, impulsadas por la Fundación Ford y el Banco Mundial. Se aludía con frecuencia a dos tipos de gobernabilidad: la democrática y la autoritaria, para distinguir entre aquellos ejercicios verticales de poder en gobiernos fuertes, ligados a las oligarquías locales y altamente corporativizadores de los grupos de la sociedad civil; y aquellos que impulsaban la descentralización en la toma de decisiones, la participación ciudadana y la gestión comunitaria y autónoma, entre otras características.

Con el tiempo, el manido concepto de gobernabilidad se sumió, al menos en México, en la trillada jerga del discurso político, y por ende comenzó a perder fuerza. Así, se ha cuestionado con frecuencia, la supuesta precisión que inicialmente tenía para calificar el ejercicio de gobierno en sociedades emergentes. Por ejemplo, un especialista afirma que “carecemos de un marco conceptual y analítico que nos permita abordar con una mínima precisión el tema de la gobernabilidad democrática” (Sánchez, Joan-Eugeni: 2005, p. 239). De esta forma, una vez que tal palabra entró por sus fueros en los medios y se le incorporó en la fase argumentativa de las políticas públicas, se habló entonces de la necesidad de gobernabilidad no sólo política, sino dentro de otras esferas: económica, social, ambiental, metropolitana, entre otras.

Quizás sea pertinente rescatar al menos dos elementos centrales en el análisis de la gobernabilidad, como bien lo indica Joan-Eugeni Sánchez (2005, pp.240-241). Nos referimos en concreto a los conceptos de actor estratégico y de reglas y procedimientos

* Ponencia al V Congreso del IGLOM, Ciudad de México, octubre de 2007. (Una versión previa de este trabajo fue presentada en el *Workshop on Urban Governance, Public Service Delivery and Participation: a comparative approach*, De Montfort University and University of Warwick, marzo de 2007).

en el ejercicio de autoridad. El actor estratégico es capaz de movilizar recursos de poder, sea como individuo, organización o grupo; mientras que el segundo concepto alude a los procesos mediante los cuales se toman decisiones y se resuelven los conflictos, es decir, alude al régimen político de un país, el cual puede a su vez fragmentarse espacialmente en regiones. De esta forma, es posible señalar la pertinencia de un concepto más elaborado para el estudio del poder en gobiernos locales y formaciones de tipo metropolitanas: el *régimen urbano*, concepto acuñado inicialmente por Clarence Stone (1989), de amplia discusión en países anglosajones y europeos, pero que apenas comienza a ser difundido en México (ver al respecto Bassols, 2006).

La transición a nuevos conceptos y enfoques teóricos, condujo a formular el alternativo de *governance*, también de origen anglosajón. Su traducción y adopción al español no estuvo exenta de algunas dificultades, pero al fin se propuso el término de *gobernanza*, fuertemente influido por el modelo adoptado en Barcelona a partir de la implementación de una política pública del tipo *planeación estratégica*. En ella se asumía el reto de los nuevos gobiernos locales en grandes ciudades, para establecer los consensos que fuesen necesarios con los actores estratégicos de la región, a fin de formular políticas de reordenación territorial y reactivación económica.

La idea central estriba entonces en el acento puesto en los diversos actores que forman parte en la gestión urbana, sus roles y la búsqueda de nuevos instrumentos que promuevan el crecimiento económico. Puede haber como indica Le Gales (en De Mattos: 2005), dos estrategias: la que privilegia un estilo empresarial de crecimiento y la que busca evitar el conflicto social en el proceso de cambio económico. Así puede existir una gobernanza orientada bajo las directrices de un régimen urbano, como en el multicitado caso de Atlanta (Stone: 1989), o bien uno en donde se pondere una política de cohesión social, en donde el empresariado no juegue un rol central en la toma de decisiones. En ambos casos la gobernanza se ejerce bajo un patrón distinto al jerárquico y más bien basado en la cooperación e interacción entre el Estado y los actores no estatales (de acuerdo con Mayntz, en Hernández Vargas: 2006).

Como se puede suponer, a medida que se ha difundido y discutido tal concepto, éste se ha vuelto más complejo y refinado, hasta el grado de que su efectividad deba considerar varios requisitos como el establecimiento de metas, la resolución de conflictos, rendición de cuentas, ajustabilidad del proceso, entre otras. Con ello es de esperar que sólo pocas ciudades ejercen un verdadero *governance* en su territorio, por lo que el concepto también puede perder una cierta dosis de eficacia al encasillarse en modelos cerrados.

En este sentido nuestro planteamiento es que el concepto adquiere una gran potencialidad analítica, siempre y cuando se diferencien modelos específicos de gobernanza urbana, que sirvan para identificar rasgos o habilidades específicas de los gobiernos locales para responder con eficacia y legitimidad a los intereses sociales planteados, mediante políticas públicas novedosas y creativas (Hirst: 2000).

La segunda parte de este trabajo está orientada a explorar algunos rasgos sobresalientes del proceso de construcción de un gobierno local en el territorio del Distrito Federal, México, para reflexionar sobre las modalidades propias del ejercicio del poder en la ciudad de México y formular algunas conjeturas en torno a una posible gobernanza urbana en dicho territorio.

II. La Ciudad de México y la conformación de un gobierno local.

a) Orígenes

Desde hace poco más de cincuenta años, la Ciudad de México inició un proceso de expansión que desbordó los límites político-administrativos del Distrito Federal. En primer orden lo hizo sobre territorios municipales del estado de México, hasta alcanzar en años recientes al territorio del estado de Hidalgo, al noreste del Distrito Federal. Así, para el año 2000 el número de unidades político-administrativas que integraban la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), estaba constituido por las 16 delegaciones en que se subdivide el Distrito Federal, 40 municipios del estado de México y un municipio de Hidalgo, con un total de 18 millones de habitantes; es decir, poco menos de la quinta parte de la población nacional (Partida y Anzaldo: 2004, p. 197).

Los procesos propiamente políticos de las formas de gestión urbana de la ciudad de México, tienen una explicación histórica que corresponde al modelo general de régimen político que el país tuvo entre 1929 y la última década del siglo pasado. Sus características esenciales eran: a) un sistema federal de gobierno regido bajo el esquema de un presidencialismo fuerte y un legislativo débil, apoyado por el partido dominante (el PRI), que gobernó al país de manera casi total en sus diversas escalas u órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal; b) un patrón de dominación social basado en la estructura sectorial del PRI la cual canalizaba las demandas obreras, campesinas y populares, dentro de un esquema clientelar y de liderazgos locales tradicionales; c) a medida que se consolidaba el crecimiento económico del país a mediados de la década de 1940, la ciudad de México experimentó un auge en las obras públicas (nuevas vialidades, construcción del sistema de transporte colectivo, Metro, drenaje profundo), a la par que sus habitantes se beneficiaron de importantes subsidios en transporte y servicios urbanos; d) la supresión del orden de gobierno municipal desde 1929 en la ciudad de México, llevó a la desaparición de los derechos ciudadanos para elegir a sus gobernantes; en su lugar se erigió la figura del regente de la ciudad, designado desde entonces y hasta 1997 por el Presidente de la República; e) la toma de decisiones en la organización y gestión urbana de la ciudad estuvo centralizada en dos figuras esenciales: el regente capitalino y (a medida que la ciudad de México se expandía por el territorio del estado de México) el gobernador mexiquense en turno; f) el proceso de legitimación del sistema político y del régimen de partido hegemónico o “cuasi-único”, fue debilitándose a medida que comenzó a perder fuerza el desarrollo estabilizador, desde fines de la década de 1960 y sobre todo después del desastre provocado por los sismos de 1985; g) sucesivas reformas políticas amortiguaron un poco este debilitamiento, pero sólo pudieron retardar unos cuanto lustros, la caída estrepitosa del partido dominante y de su élite política local durante la década de 1990; h) el fenómeno de la alternancia política en el Distrito Federal inicia propiamente con la aprobación por el Congreso de la Unión, de una iniciativa de Ley que creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en 1988, con facultades reglamentarias; integrada por 66 representantes¹ emanados del voto ciudadano, años más tarde se constituirá en

¹ De los cuales 40 son electos directamente por los ciudadanos del DF y 26 son resultado de una fórmula estadística de representación proporcional, según los votos obtenidos en los 40 distritos electorales locales.

Asamblea Legislativa y en un órgano local de contrapeso al poder del gobierno capitalino y de sus 16 delegaciones políticas; i) está pendiente una nueva reforma política que de luz verde para la creación de un gobierno local propio en el Distrito Federal; j) los avances en esta materia se sintetizan en: la sustitución de la figura del regente de la ciudad de México por la de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, electo por voto directo a partir de 1997; y la elección de los 16 Jefes Delegacionales a partir de 2000.

Sin embargo, no se ha llegado a obtener la figura de un gobierno local, de similar status jurídico al del resto de las entidades federativas del país, puesto que carece de una Constitución propia, en su lugar existe un Estatuto de Gobierno que norma su desempeño; es la Cámara de Diputados federal y no la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), quien aprueba el presupuesto de ingresos anual de esta entidad federativa así como fija el monto de endeudamiento posible de la misma. Es obvio que dadas estas limitaciones el gobierno del Distrito Federal queda sujeto a criterios políticos en donde los partidos se disputan diversos intereses, tanto locales como nacionales. Asimismo, el Jefe de Gobierno está sujeto a los vaivenes de la política nacional, por la misma fragilidad del estatuto jurídico del DF, como lo mostró el “desafuero” del entonces Jefe de Gobierno Manuel López Obrador, por parte de la Cámara de Diputados, quien tiene esa facultad constitucional².

Este tipo de hechos muestran el entramado de intereses, locales y nacionales, que inciden en la estructura política del gobierno de la ciudad de México y hacen más compleja la toma de decisiones en esta entidad federativa.

En síntesis, la ausencia de formas de representación democrática en el gobierno local desde 1929 han sido el principal foco de atención y objeto central de las sucesivas reformas políticas en el Distrito Federal, particularmente desde la década de 1980. Pero no es posible analizar en forma aislada los procesos de discusión e implementación de las reformas. Para ello conviene tomar en cuenta que los cambios en la escena política local se acompañan de una fase de movilizaciones sociales en los últimos 20 años, que inicia con el movimiento de los damnificados por el sismo de 1985. Se trata de una era de conflictualidad urbana que ha atravesado por diversos momentos de auge y descenso de movimientos sociales, la emergencia de nuevos actores, “constituidos relativamente al margen del pacto populista corporativo” (Duhau, 1994, p. 57), y la puesta en práctica de políticas de corporativización de organizaciones sociales en el marco de la regulación de conflictos urbanos. De esta forma fue posible instrumentar una reforma paulatina del régimen especial del gobierno de la ciudad de México, sin erosionar en extremo las bases del orden social y político local. Cabe añadir que a la par de este proceso, se

² El desafuero se dio tras un largo litigio a raíz de una demanda de la Procuraduría General de la República (PGR), por desacato del Jefe de Gobierno a una orden judicial relacionada con la construcción de una obra vial en el poniente de la ciudad. Con el desafuero, López Obrador fue sustituido por unos días en la Jefatura de Gobierno, mientras los medios de comunicación informaban paso a paso del proceso y el entonces gobernante ganaba una gran popularidad con vistas al proceso electoral de 2006. Con el efecto *boomerang* en su contra, la PGR se desistió de la demanda y el Jefe de Gobierno regresó a su puesto con la seguridad de haber obtenido una mejor plataforma política, para su posterior lanzamiento como candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT), dentro de la Alianza Por el Bien de Todos. La disputada elección de julio de 2006, en la que el IFE declaró vencedor de la contienda presidencial al panista Felipe Calderón Hinojosa, fue una muestra tanto del liderazgo político obtenido por López Obrador, como la relevancia que ha adquirido la plaza del Distrito Federal en el escenario político nacional.

consolidó un sistema de planeación urbana que en medio del conflicto social, se constituyó como un ente regulador de la organización del espacio urbano. Finalmente, frente a la presencia de grandes asentamientos irregulares en la ZMCM, se pusieron en marcha “mecanismos de regularización de la propiedad del suelo y para el financiamiento de programas de vivienda progresiva y (...) de política social que incorporaron en su diseño la participación comunitaria” (Duhau: 1994, p. 58).

b) El gobierno del PRD en el Distrito Federal (1997-2006)

Dadas las limitaciones en el orden jurídico del gobierno local, ¿cuál ha sido la incidencia de un nuevo partido en el poder dentro del Distrito Federal, desde la realización de las primeras elecciones democráticas en 1997? Desde entonces y hasta el presente, ha sido el PRD el partido que ha encabezado la jefatura de gobierno en el siguiente orden: Cuauhtémoc Cárdenas (dic1997-may1999); Rosario Robles (may1999-dic2000); Manuel López Obrador (dic2000-mar2005), Alejandro Encinas, (2005-diciembre de 2006) y Marcelo Ebrard, a partir del 5 de diciembre de 2006. El primer periodo de gobierno emanado del voto ciudadano se restringió a 3 años, para empatarlo con la sucesión presidencial del año 2000, para que en los subsiguientes, fueran de 6 años cada uno. De tal forma que casi concluye una década de gobierno perredista en el Distrito Federal, por lo cual nos parece un lapso suficientemente razonable para realizar algunas conclusiones, aunque éstas sean muy esquemáticas y generales.

Lo primero que llama la atención es la no terminación del periodo constitucional por parte de los dos Jefes de Gobierno electos. En efecto, como puede desprenderse del anterior párrafo, dos de ellos son funcionarios públicos que sustituyeron en el puesto al mandatario local. Es decir, no son producto del voto, sino de una nominación o en su caso *designación* por parte del partido en el poder y más concretamente de quien deja el cargo: Cuauhtémoc Cárdenas designa a Rosario Robles para lanzarse en pos de la candidatura oficial de su partido para las elecciones presidenciales de 2000; Manuel López Obrador hace lo suyo y nombra a Alejandro Encinas como su sustituto. En ambos casos, tanto Robles como Encinas no siguieron pautas de política y gestión urbana muy diferentes a las de su antecesor en el cargo. Sus periodos fueron breves, aunque un poco más prolongado en el caso de Rosario Robles como Jefa de Gobierno. También en ambos casos, el anterior cargo que tenían era el de Secretario General de Gobierno, un puesto netamente político que requiere habilidades para el manejo de los conflictos sociales y urbanos locales y un especial talento para mantener en niveles manejables las relaciones con las demás órdenes de gobierno, tanto delegacional como federal.

Al actual mandatario local Marcelo Ebrard, le queda todavía un largo trecho por recorrer en el gobierno de la ciudad capital, pero no sería ninguna sorpresa el que se pronunciara en su momento, como aspirante en la siguiente contienda electoral para la presidencia de la república.

El segundo punto concierne a la permanencia misma del PRD en el poder durante ese lapso de tiempo. En otras palabras, la sustitución del otrora partido en el poder (el PRI) en el Distrito Federal, ha tenido como elemento definitorio un proceso de alternancia limitado en donde un solo partido, el PRD, mantiene la hegemonía política que en su mejor momento tuvo el PRI. La caída tan estrepitosa de este partido en las preferencias electorales, no era siquiera previsible pocos años antes de 1997. Lo cierto es que fue el

preludio de las elecciones presidenciales tres años adelante, aunque en este caso haya sido otro partido, el PAN el que haya resultado favorecido con el voto popular. La pérdida de legitimidad de un partido en el gobierno, no es producto de factores meramente circunstanciales, sino de la añeja acumulación de problemas, que en el marco de la crisis económica iniciada en la década de 1980, erosionaron las bases del poder, fragmentaron a la clase política e incidieron en la percepción ciudadana de que se acercaba el fin del partido “cuasi-único” en el poder. De todos modos, su caída fue más allá de lo estimado, con lo que durante el primer gobierno de alternancia en el DF, el PRI obtuvo mayoría en apenas uno de los 40 distritos locales dentro de la Asamblea Legislativa, pero no logró conquistar en las elecciones del año 2000, ninguna de las 16 plazas delegacionales en juego. Por su parte, el PAN gobernó en 6 delegaciones en el 2000 y se convirtió entonces en la segunda fuerza política del DF. Sólo hasta las elecciones intermedias de 2003, el PRI conquistará una Delegación (Milpa Alta), en tanto que el PAN mantendrá dos jefaturas delegacionales (Miguel Hidalgo y Benito Juárez). Con estos resultados, en el año 2000 el PRD perdió alguna fuerza, mientras que el PAN la incrementó debido a la exitosa campaña presidencial de Vicente Fox y el PRI, por su parte, desaparecía casi por completo de la escena política local (Gómez Tagle: 2000, p. 664). Seis años después el PAN pudo retener las dos delegaciones que gobernaba desde tres años atrás, mientras que el PRD se quedaría con las 14 restantes, incluyendo la delegación rur-urbana de Milpa Alta. Es decir, la tendencia se consolida a favor del partido dominante en el Distrito Federal, incluyendo una composición partidista de mayoría simple a favor del PRD en la Asamblea Legislativa.

Así las cosas, ¿qué interpretación podremos ofrecer sobre la permanencia de un partido de oposición, en el gobierno de la principal ciudad mexicana y además, capital de la república? En otras palabras: ¿mediante qué tipo de mecanismos y acciones, el gobierno de la ciudad de México ha logrado mantenerse en el poder y aplicado una política social de nuevo cuño?; ¿se han podido realizar los objetivos de democratización de las instituciones políticas y en consecuencia el fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos políticos de la ciudad (Alvarado y Davis: 2003)?

Las preguntas anteriores nos llevan a considerar las condiciones bajo las cuales un partido de oposición como el PRD, ha logrado consolidarse en esta plaza política, a pesar de situarse en el “fuego cruzado” de intereses nacionales y locales que están en disputa permanentemente en la capital de la república. Así también puede decirse que el éxito de sus políticas no necesariamente lleva a obtener resultados muy optimistas respecto de problemas que enfrenta la capital desde hace varios años, como es el caso de la delincuencia, la contaminación atmosférica, transporte público deficiente, escasez de agua, entre otros. Es obligado remontarnos ahora a algunos aspectos de la historia política reciente en la urbe capitalina.

c) Política local y construcción del poder.

- 1) Veamos en primera instancia de dónde surgieron las bases sociales de apoyo político al PRD. Al tratarse de un partido joven, nacido en 1989, como resultado de la fusión de varios partidos de la izquierda mexicana de entonces, el PRD construye uno de sus principales soportes político electorales sobre la base de las organizaciones sociales que se movilizaron a partir del terremoto de 1985 en la ciudad de México. El movimiento de damnificados tuvo su principal base territorial en el centro histórico y zonas aledañas. La Coordinadora Única de

Damnificados fue su principal plataforma de lucha en los años subsiguientes. En las elecciones presidenciales de 1988, un número significativo de organizaciones sociales apoyaron la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en el Frente Democrático Nacional. De hecho, en el DF este candidato obtuvo oficialmente la mayoría de votos, por encima del candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari. A pesar de no haber logrado el triunfo nacional, Cárdenas anunciaba ya la importante presencia de la oposición en la capital federal. Este reconocimiento estuvo presente en las negociaciones emprendidas por Manuel Camacho Solís, durante sus 5 años al frente de la regencia capitalina (1988-1993), en el marco de su política de “concertación social” con las organizaciones civiles de la ciudad. El PRI estaba completamente desacreditado, por lo que la política de consensos se logró entre la naciente ARDF y el propio regente. Aquí podemos decir que se definió una línea de política que permitió una “governabilidad contenida”, esto es, una que evitó un mayor conflicto social aún cuando la legitimidad del gobierno capitalino, todavía designado por el presidente, fuese severamente cuestionada. De ahí vino la discusión y posterior aprobación de una nueva reforma política (1993) y el plebiscito ciudadano (marzo de 1993). Este último puso sobre la mesa de discusión dos preguntas: la elección del gobernante local y la posibilidad de crear el estado número 32 de la república. A la fecha queda pendiente el segundo de los puntos, el cual implicaría una reforma a la Constitución mexicana.

- 2) La parte esencial de la reforma política de 1993 no se llevó a cabo³, pues durante los primeros años del último presidente priísta, Ernesto Zedillo (1994-2000), el tema de una nueva reforma política volvió a cobrar fuerza y fue entonces cuando se aprobó en la Cámara de Senadores la elección directa del gobernante local en 1997, por 3 años y por 6 años a partir del 2000. Desaparecía la figura de regente y se abría la posibilidad de que un partido opositor ganase las elecciones. Fue entonces cuando el PRD bajo el liderazgo todavía fuerte de Cuauhtémoc Cárdenas, obtiene la victoria, considerada como “histórica” para la izquierda mexicana. Cárdenas gana gracias al apoyo de múltiples organizaciones urbano-populares, ya incorporadas en el seno del PRD, pero también por una buena parte del electorado de la clase media capitalina, universitaria, intelectual, educada, que simpatizaba con ideas y valores democráticos con los que se identificaba Cárdenas. Tan solo recordemos que en el Distrito Federal se concentra la mayor parte de las universidades públicas y centros educativos del país, también ahí radican la mayor parte de la “masa crítica” de los intelectuales y artistas mexicanos, así como de la prensa nacional. Son muy conocidas las emblemáticas fotografías de Cuauhtémoc Cárdenas en Ciudad Universitaria, como representación de la fuerza y legitimidad de su figura en un espacio clave de la izquierda mexicana.
- 3) A las fuerzas sociales de los años noventa, el PRD extendió sus lazos hacia otro tipo de organizaciones, en su momento integradas al declinante PRI: taxistas y comerciantes del sector informal que crecieron en número e importancia desde la década pasada. Las disputas y divisiones internas minaron la presencia del PRI en esas organizaciones e hicieron crecer la clientela política del nuevo partido en el gobierno capitalino. Sin embargo, ha habido un sector *duro* que desde el principio y hasta la fecha, se ha opuesto a las políticas gubernamentales

³ Consistía en un mecanismo indirecto para elegir al próximo gobernante del DF. Esto era así, por la voluntad del presidente Salinas de Gortari de no permitir la realización de elecciones locales en 1994.

locales. Se trata de dos corporativos muy fuertes por su número y presencia: el Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) y el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, ambos integrados al PRI. Las negociaciones por revisión salarial y de contrato colectivo suelen ser difíciles, a lo que se suma la realización de paros laborales, sobre todo en el servicio del transporte colectivo, todo lo cual señala los aspectos ríspidos de una agenda de gobierno que no ha podido construir una política abierta y de entendimiento con el conjunto de actores sociales urbanos, independientemente de su posición política.

- 4) El primer trienio del PRD en la Jefatura de Gobierno fue el inicio de la construcción de una “governabilidad democrática”, la cual dista mucho de haberse consolidado en sus aspectos esenciales, como lo demuestra el análisis realizado por Arturo Alvarado y Diane Davis (2003). Se difundió el lema de “La ciudad de la Esperanza” para identificar al nuevo gobierno, así también se impulsó la planeación micro-regional con la discusión en varias zonas urbanas de la ciudad, de planes parciales de desarrollo urbano en donde se involucraron organizaciones vecinales diversas (Arzaluz y Bassols:2002). Hubo un real esfuerzo por impulsar una política integral de planeación metropolitana, la cual no funcionó por las dificultades políticas y operativas que surgían a partir de dos criterios distintos de acción territorial, desde el gobierno del DF y del Estado de México (Pradilla: 2004).
- 5) Se aprobó una segunda Ley de Participación Ciudadana, un tanto ambigua en cuanto a la posibilidad de generar organizaciones ciudadanas sólidas, mientras que en 1999 se realizaron las elecciones de Comités Vecinales en el DF, organizadas ahora por el naciente Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). Menos del 10% de los ciudadanos registrados en el padrón electoral, acudieron a las urnas. Se cuestionaba tanto el procedimiento como sus implicaciones sociales. Sin embargo, era la última vez que se efectuaban elecciones de ese tipo en el DF, pues a partir de López Obrador, éstas no se han realizado, a pesar de lo previsto en la propia legislación. La integración de Comités Vecinales fue un proceso que mostró el escaso interés de los ciudadanos hacia este tipo de estructura de representación ciudadana y estuvo marcado por la conformación mayoritaria de militantes perredistas (Sánchez y Álvarez: 2006, p, 241).
- 6) A manera de comparación entre el primer gobierno electo y el segundo en el DF, saltan a la vista del análisis las diferencias, no sólo de construcción de imagen pública del gobernante, sino de la obra pública emprendida. Mientras que la gestión cardenista fue en principio un esfuerzo por marcar las diferencias con los gobiernos autoritarios del pasado reciente, la gestión obradorista ya no tuvo necesidad de enfocarse en ello, sino de poner en marcha su programa de obras públicas y políticas sociales orientadas a la construcción de un mercado electoral favorable al mandatario local. Mientras que la primera gestión duró tres años, la segunda iba a ser del doble de duración, por lo que, como ocurre con los gobiernos estatales (6 años de duración) frente a los municipales (3 años), se podrían programar obras a un mayor plazo y dosificar mejor el presupuesto público. Además, López Obrador diseñó hábilmente una estrategia de acercamiento con la prensa y la televisión, con su tradicional conferencia matutina, que comenzó a preocupar a las altas esferas del gobierno del presidente Fox. Cárdenas no lo hizo y al momento de separarse de su cargo para lanzarse por tercera ocasión como candidato a la presidencia, su imagen iba de más a menos y su actuación en el proceso electoral del 2000 marcó el fin de su

liderazgo al interior del PRD. Además, el gobierno de Cárdenas-Robles enfrentó problemas financieros debido al retiro de fondos federales para esta entidad, así como el pico más alto hasta entonces de delincuencia y criminalidad en la ciudad de México. Ello, aunado al difícil problema de los vendedores ambulantes y la añeja estructura corrupta de las corporaciones policiacas, minó seriamente su credibilidad ante la opinión pública y representó un desafío no superado durante la primera administración del PRD en el DF (Alvarado y Davis, 2003).

- 7) La gestión de López Obrador estuvo marcada de una manera mucho más patente, por la confrontación permanente con el gobierno federal y su partido, el PAN, quienes no cesaron en su esfuerzo por obstaculizarle el camino a la sucesión presidencial del 2006, algo que lejos de lograrlo, le generaron una mayor publicidad en los medios de comunicación a nivel nacional e incluso internacional. El caso del desafuero fue el error político más grande del PAN a este respecto, aunque fuese el entonces presidente Vicente Fox su principal instigador y operador político.
- 8) El gobierno de López Obrador logró construir la imagen de un político “honesto y valiente”, por saberse enfrentar con sus enemigos políticos, hacer obras públicas y “ayudar a la gente”. No obstante ello, la imagen del PRD quedó severamente cuestionada con los “videoscándalos” difundidos en el 2005, en el que se involucraban a políticos cercanos al gobernante. Algunos, como René Bejarano y Carlos Imaz fueron a la cárcel, para luego ser dejados en libertad. El primero en particular se ha distinguido por ser uno de los principales operadores políticos de López Obrador en el DF, pero ante la opinión pública el político tabasqueño es “otra cosa”. En todo caso, lo que se logró durante el sexenio 2000-2006 fue el consolidar el “voto duro” en el DF, fortaleciendo las redes ciudadanas partidistas en las delegaciones de mayor presencia del PRD. Un caso ejemplar es el de Iztapalapa, una delegación de poco menos de dos millones de habitantes, la mayoría de ellos de bajos recursos, con graves carencias de agua, inseguridad y una deficiente administración de servicios públicos, pero a pesar de ello fiel al PRD y al Jefe de Gobierno en turno.
- 9) Uno de los más importantes instrumentos de los que se valió López Obrador para ampliar y consolidar su clientela electoral, fue su política social, consistente en otorgar apoyos económicos a las madres solteras y a las personas de la tercera edad (mayores a los 65 años) residentes en el DF, así como dotar de útiles escolares a todos los niños y jóvenes de las escuelas públicas de la ciudad (ciclo escolar de primaria y secundaria)⁴. Hay que considerar que una parte creciente de la población capitalina es mayor a los 65 años, por lo que iba dirigido a captar simpatías de ese sector generalmente abandonado por las políticas del estado. Así también, es creciente el número de madres solteras, particularmente de adolescentes y jóvenes menores de 25 años, por lo que el programa contaba con el apoyo popular de miles de familias que vieron en López Obrador un líder que “sí cumplía” con sus promesas. Estas acciones, que fueron objeto de crítica de la oposición, al considerarlos como una estrategia populista que preparaba la campaña presidencial del mismo personaje, fueron luego imitadas por políticos del PRI en el estado de México (algunos alcaldes mexiquenses han replicado su

⁴ En realidad, el paquete era más extenso, consistía en los siguientes Programas: a) De Transporte Gratuito a Adultos Mayores; b) De Atención a Personas Adultas Mayores; c) De Rescate de Unidades Habitacionales de Interés Social (una evaluación sobre este Programa en: Sánchez y Álvarez (2006).

programa). La sensibilidad política del entonces gobernante le trajo en consecuencia un apoyo popular enorme, al grado de realizar dos consultas públicas para ratificar su mandato, en las cuales eran de esperarse resultados favorables por parte de la población participante. De hecho, López Obrador se valió de las nuevas figuras de participación ciudadana, como el referéndum y el plebiscito para refrendar el consenso de los habitantes defensores a su gobierno.

- 10) La segunda acción importante fue un programa de obras públicas que mostrara lo que podía realizarse desde el gobierno local en unos cuantos años. Así se procedió a la construcción del “Segundo Piso” del Periférico, una arteria esencial de la ciudad, que para el 2000 estaba ya saturada de vehículos automotores a casi cualquier hora del día. La obra se entregó en dos partes, una inaugurada por López Obrador en 2005 y la última, a principios de junio de 2006, con Alejandro Encinas y la Secretaria del Medio Ambiente, Claudia Scheinbaum. Esta obra fue sometida a una consulta pública y aunque hubo algunas resistencias de propietarios de inmuebles y comercios, finalmente se llevó a cabo sin grandes tropiezos. La obra requirió una importante inversión de fondos públicos, sobre los cuales la oposición pidió sin éxito se aclarara a cuánto ascendió el monto total del gasto. Una obra vial complementaria fue la construcción de las estaciones del Metrobús en la avenida Insurgentes, que se caracteriza por estar rodeada de edificios modernos, comercios, agencias de autos, algunos hoteles de lujo y es considerada de antaño como una avenida llena de glamour y modernidad. Ahí el Jefe de Gobierno optó por otorgarle exclusividad para el transporte público a ese sistema y prohibir circular a los microbuses, concesionados por el gobierno a propietarios privados de una o varias unidades. Hubo negociaciones con el sector transportista, pero al final se impuso el acuerdo para que no circularan los microbuses en Insurgentes. Aquí, la política urbana se orientó hacia las clases medias, particularmente del poniente de la ciudad. Pero en esencia, la obra pública comprometida se orientó a megaproyectos de infraestructura vial con la participación activa del capital privado, el cual fue favorecido con estímulos y exenciones fiscales en sus propias empresas (Pradilla: 2004, p. 58).
- 11) En cuanto a la política de vivienda, el PRD desarrolló desde 1997 una propuesta novedosa de trabajo con organizaciones civiles. En concreto con la Coalición Habitat en donde confluían las más importantes asociaciones dedicadas a promover vivienda popular en la ciudad de México, como “Casa y Ciudad”, CENVI y COPEVI. Se impulsó un Programa de Mejoramiento de Vivienda y uno de Vivienda Nueva en lote familiar (Sánchez y Álvarez, 2006, p. 226), en el que fue posible trabajar de manera conjunta con el Instituto de Vivienda y desarrollar un vasto programa de vivienda para sectores de bajos recursos. Sin embargo, a partir de López Obrador, cobró mayor fuerza la acción de grupos inmobiliarios privados en el marco de una política de vivienda cada vez más orientada al pragmatismo. Así al concluir su gestión el segundo gobierno perredista (diciembre de 2006), se tenía un stock sin precedentes de vivienda nueva en el DF, promovida por inmobiliarias privadas. Esto cobró mayor fuerza con la promulgación de un Bando de Gobierno que estimula la redensificación urbana en las delegaciones centrales.
- 12) Una acción más visible de su gobierno fue la intervención decidida en el centro histórico de la ciudad de México para presentar una imagen “bella” y “ordenada” del corazón de la ciudad, ante los ojos del turista nacional y extranjero, pero también como pivote para generar mayores inversiones de

capital privado. La propuesta fue impulsada en mancuerna con el principal empresario mexicano, Carlos Slim, quien se ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo en la presente década (en el 2007 por encima de Bill Gates), por sus intervenciones afortunadas en diversas empresas de telefonía, bursátiles y comerciales. Esta acción conjunta entre obra pública e intervención empresarial no se había visto nunca en la magnitud que se produjo y mostró las enormes potencialidades que una ciudad globalizada como la de México, podía ofrecer para el inversionista que optara por ella en una visión de mediano o largo plazo. Además es una muestra de la posibilidad de construir asociaciones público-privadas en la gestión urbana de grandes ciudades, con lo que López Obrador contó con una margen de credibilidad y confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros. Así fue posible edificar la *Torre Mayor*, el edificio más alto de América Latina hasta 2006 y hacer del Paseo de la Reforma una avenida remodelada, dedicada al turismo internacional y al sector de servicios de alta especialización.

- 13) Para rematar este conjunto de intervenciones gubernamentales de éxito publicitario entre grandes sectores de la población, el mandatario local impulsó la realización de conciertos de rock gratis en el famoso Zócalo capitalino. Con ello daba respuesta a los reclamos de miles de jóvenes que reclamaban esos espacios desde tiempo atrás. Así, el Zócalo reforzó su naturaleza de principal espacio público de expresión ciudadana, no sólo para realizar actos de protesta, sino para fortalecer la cultura cívica y recreativa de los habitantes capitalinos.
- 14) Resta decir que dentro de la obra pública realizada en los primeros años de 2000 se construyeron algunas preparatorias y una universidad, la Universidad de la Ciudad de México, en el oriente de la ciudad dirigida a sectores de jóvenes de escasos recursos económicos. Su creación no fue bien vista inicialmente por académicos de las principales universidades públicas con sede en el DF, pues se pensaba que era mejor apoyar la infraestructura ya existente y no crear espacios nuevos. Este centro universitario obtuvo, poco después, su autonomía con respecto del gobierno del Distrito Federal, con lo que ha iniciado una interesante inserción en la problemática social y urbana de la capital del país.

III. Gobernanza urbana: conjeturas sobre el caso de México

Una primera interrogante sobre la gestión del PRD en el Distrito Federal se dirige a pensar si se ha logrado construir elementos nuevos de gobernabilidad. Esto es, si es posible reconocer una habilidad especial del gobierno local para responder con eficiencia y legitimidad a los intereses de la mayoría, mediante políticas públicas novedosas, creativas y que promuevan la participación social (Hirst: 2000).

En un primer intento por responder a este tipo de cuestiones, se puede decir que la gestión perredista en el Distrito Federal ha logrado construir una imagen propia de gobierno local fuerte, con dosis de liderazgo capaces de encauzar cierto tipo de necesidades y demandas de la población (Alvarado y Davis: 2003). De esto se desprende que la descentralización de la administración pública es un hecho patente, aunque todavía queda el trecho de los gobiernos delegacionales, débiles y dependientes del gobierno central del DF.

Hubo un giro sensible en el estilo de gobernar de López Obrador, más orientado hacia una política pragmática, desligada de una planeación racional del territorio (Pradilla: 2004). No es posible constatar un proceso amplio de participación ciudadana en la definición de las políticas urbanas. Al contrario, la ciudadanía fue un soporte pasivo de sus políticas, a sabiendas de que en uno u otro caso, contaría con su apoyo, o al menos, con el reconocimiento de que la ciudad de México estaba cambiando con su gestión. Hay que considerar además, que el Distrito Federal ha sido una plaza importantísima dentro de la escena política nacional. En ese sentido, interactúan y chocan frecuentemente los intereses locales y nacionales, desde el aparato legislativo como el ejecutivo, en sus tres órdenes de gobierno. Así, los debates en la Asamblea Legislativa del DF han sido intensos ante Iniciativas de Ley enviadas por el ejecutivo local, en tanto que no siempre se ha contado con la mayoría partidista para aprobarlas.

Adicionalmente los medios han jugado un papel fundamental y ha incidido bastante en la construcción de la imagen pública de un gobernante. Y en ello, López Obrador, a diferencia de Cárdenas se sirvió hábilmente de la prensa y los medios para proyectar su imagen, pese al desprestigio de algunos de sus colaboradores más cercanos.

También es importante reconocer la intensa labor de los operadores políticos del PRD en el DF, aunque para lograrlo hayan tenido actuaciones deshonestas que han sido ya calificadas por la opinión pública. Las viejas clientelas de las organizaciones sociales de la CNOP del PRI han cambiado de colores y ahora son fieles seguidores del partido en el gobierno local, a pesar de que eso no forma parte, como se señalaba, de una política seria de planeación urbana. La ciudad sigue sin tener un ordenamiento integral del comercio ambulante, proliferan las rutas de microbuses sin un plan general de vialidad y transporte, se mantienen las presiones de grupos de transportistas sobre cualquier intento de normar las líneas y mejorar el servicio. Han cesado ciertamente las invasiones masivas de terrenos, aunque Iztapalapa y otras delegaciones de la ciudad, muestran hoy esa herencia reciente de su historia, por lo que el gobierno capitalino aún no ha logrado satisfacer las demandas de infraestructura que requieren ciertas partes de la ciudad, todavía formando parte de una metrópoli segregada espacialmente y socialmente dividida por clases y estratos sociales bien definidos.

En el ámbito de las relaciones entre gobierno y sociedad civil, se aprecian dificultades para un diálogo más fructífero. En principio porque el propio Gobierno del Distrito Federal (GDF) tiene una compleja estructura administrativa, altamente centralizada. Así, no obstante el esfuerzo de acercamiento inicial, expresado en una política de concertación social con organismos civiles, los resultados prácticos muchas veces han sido escasos (Sánchez y Álvarez: 2006, p. 220). En términos de *gobernanza urbana*, se constata una débil iniciativa para poner en marcha nuevas prácticas administrativas que fomenten el diálogo y la implementación de políticas públicas, dirigidas a facilitar la toma de decisiones por parte de la ciudadanía. Aún no se ha logrado superado la práctica clientelar dentro del PRD que así ha podido contar con una base social de sustento a las políticas gubernamentales locales. En ese sentido, la conformación de una gobernanza urbana en la ciudad de México es un proceso apenas iniciado durante el primer gobierno electo desde 1929 (fecha en que desapareció el gobierno local), cuyo partido, el PRD, se pronunció a favor de democratizar las instituciones políticas locales. Sin embargo, las nuevas redes construidas entre grupos de comerciantes ambulantes, taxistas, colonos dentro de asentamientos irregulares, entre otras organizaciones sociales, conformó una coalición política muy semejante a la que el viejo PRI poseía a

través de la CNOP en otros tiempos. De ahí que algunos de sus principales líderes hayan obtenido puestos públicos en el gobierno local (Alvarado y Davis: 2003, p. 160). Algo que sigue manteniéndose en el actual sexenio de Marcelo Ebrard por la presencia de las fuerzas sociales que apoyaron la campaña política de López Obrador en 2006.

La gobernanza urbana también se ve acotada por la presencia de otros grupos emergentes, pero éstos insertos en el campo de la delincuencia organizada, si bien en diversas escalas de operación: desde la acción de grupos dedicados al “narco-menudeo”, como de aquellos que se dedican a introducir mercancía ilegal al país o vender productos cibernéticos “piratas” (CDs, videos, software). En este caso, el discurso político del gobierno perredista se enfrenta a un dilema, pues por lo general, los cateos de casas y vecindades en busca de los “capos”, se realizan en zonas de fuerte arraigo popular e identidad cultural, como en la colonia Tepito. De ahí que a cada acción pública corresponda una reacción popular, muchas veces orquestada por los grupos de interés localizados en esas zonas.

Con respecto al “ambiente estructural” que ha rodeado a la administración local desde 1997, cabe decir que ha pasado por dos fases que delinear los contornos del nuevo gobierno local: Una primera se inicia durante la gestión de Cárdenas que explícitamente se propone marcar una clara diferenciación con respecto de las políticas neoliberales del gobierno federal. En ese entonces el presidente era Ernesto Zedillo, del PRI y las relaciones intergubernamentales comenzaron a ser conflictivas. Algo que nunca se había dado durante el largo periodo de las regencias capitalinas. Pero en el necesario deslinde entre ambos órdenes de gobierno, se produjeron roces y trabas legislativas y financieras para que la administración cardenista pudiera tener un mejor desempeño. Asimismo, al parecer algunos grupos de la iniciativa privada no vieron con buenos ojos el ascenso de Cárdenas al gobierno de la ciudad por su ideología de izquierda, pero sin que esto llevara a una ruptura crítica. Simplemente la limitada obra pública en tiempos de Cárdenas no se vio acompañada de grandes inversiones privadas y la ciudad pareció entrar en franca decadencia, rezagándose en algunos aspectos (como la infraestructura turística y de servicios) en la red de ciudades conectadas al mercado global.

Con el primer gobierno federal de alternancia, al frente del PAN y el exdirigente nacional perredista López Obrador, en el GDF, el ambiente estructural cambió un poco. En primer lugar, el nuevo gobernante local se planteó diferenciarse de su antecesor y en ese sentido actuó con políticas más pragmáticas con respecto al capital y estimuló fuertemente la inversión privada en la ciudad. Mientras que por otro lado, desde muy temprano momento, las relaciones entre GDF y gobierno federal se tornaron cada vez más encrispadas. Muchas de las declaraciones a la prensa de López Obrador en sus famosas “conferencias de prensa” matutinas iban dirigidas a las acciones del gobierno federal, o bien a referencias al ambiente político nacional, con lo cual éste se proyectaba ya como posible candidato del PRD a la presidencia de la república. El punto álgido fue el desafuero del gobernante, que ya hemos reseñado y que mostró las graves fisuras entre los grupos de poder y los órdenes de gobierno. Esta noticia trascendió a la prensa internacional y en esencia puso en claro las debilidades estructurales por las que atraviesa todavía el gobierno local del Distrito Federal, jaqueado por las fuerzas y grupos de interés nacionales. En ese sentido, resulta todavía prematuro admitir la existencia de una gobernanza local en la ciudad de México, con el añadido de que sólo integra a la mitad de la población y territorio de su área metropolitana. Esto es, no puede

haber gobernanza sin construir los puentes necesarios con el resto de las estructuras de poder en el ámbito metropolitano, particularmente en el territorio mexicano.

Un segundo momento comienza a destacarse a partir de diciembre de 2006, con Marcelo Ebrard al frente del GDF y Calderón en la presidencia, pues aunque el nivel de conflictualidad no haya descendido notoriamente, como el propio Ebrard ha puesto de manifiesto ante la prensa y los medios (en una medición de fuerzas al seno del Distrito Federal, entre el mandatario local y el federal), la diferencia radica en la presencia aún fuerte de López Obrador y las dificultades en materia de maniobra política que el actual Jefe de Gobierno experimenta. Ello dado el faccionalismo al interior del partido gobernante (PRD), que ciertamente no le favorece del todo. Además, comienza a observarse una sensible caída de los votos hacia el PRD en los procesos electorales posteriores a diciembre de 2006, cosa con la cual los estrategas del partido tendrán que lidiar en las acciones de gobierno de los próximos meses. De esta manera, el liderazgo político ejercido por López Obrador es todavía indiscutible, aunque afecte negativamente en las preferencias electorales hacia ese partido (ejemplos recientes son los resultados electorales en Zacatecas, Veracruz y Aguascalientes) y no contribuya a fortalecer la imagen de los gobernantes locales, como el caso de Marcelo Ebrard.

Una última reflexión nos lleva a plantear la dificultad para llegar a acuerdos políticos de largo plazo con los actores estratégicos y aún con los “no estratégicos”, así como con las principales instituciones políticas nacionales y locales (federación-estado-municipios). La concertación social no puede hacerse por medio de acuerdos cupulares o corporativistas, pues no fomenta la discusión e involucramiento de la población en la toma de decisiones sobre grandes proyectos urbanos. Se trata pues de plantear una readecuación del concepto de gobernanza, a fin de situar correctamente el papel de los componentes locales de la sociedad civil, sus recursos disponibles y la cultura política tanto de los gobernantes, como de la ciudadanía en general.

Para concluir, no está por demás insistir en que la principal metrópoli mexicana requiere de una intervención regional y concertada entre los distintos ordenes de gobierno: problemas como el de la contaminación, transporte, agua o suelo urbano, tendrán que ser abordados mediante políticas públicas metropolitanas que garanticen la sustentabilidad futura de la metrópoli y su región. Eso ya se ha señalado de manera amplia y detallada por quienes se han dedicado a su estudio o por quienes conocen los aspectos técnicos y operativos del gobierno. Reforzar un régimen de gobernanza en la ciudad de México implica en principio, definir una agenda de gobierno de largo plazo, fortalecer las relaciones intergubernamentales, transparentar la obra pública y descentralizar la toma de decisiones hacia las delegaciones políticas pero sin fomentar la fragmentación espacial que puede acompañarla.

En el futuro inmediato se visualiza, como en otras latitudes del mundo, la necesidad de pensar en gobiernos o autoridades de carácter metropolitano y así proyectar formas metropolitanas de gobierno, que como en Madrid, Londres, Montreal o Tokio, en países desarrollados; o bien Sao Paulo, Caracas, Buenos Aires o Quito, en América Latina, se preparan mejor para construir proyectos de ciudad más sólidos y suficientemente concertados (Lefèvre: 2005). Pero para lograrlo, el Distrito Federal requiere todavía una nueva reforma política que le otorgue de una vez por todas, el status jurídico que se merece como parte integrante del Pacto Federal existente entre las 32 entidades de la república mexicana.

BIBLIOGRAFÍA

Alvarado Arturo y Davis Diane E. (2003). "Participación democrática y gobernabilidad en la Ciudad de México: el reto del PRD en la transición política", en Revista Estudios Sociológicos de el Colegio de México, Vol. XXI, núm., 61, enero-abril, 2003, pp. 135-166, México.

Aguilar, Adrián Guillermo y Alvarado, Concepción (2004). "La reestructuración del espacio urbano de la Ciudad de México. ¿Hacia la metrópoli multinodal?", en Aguilar, Adrián Guillermo, Procesos metropolitanos y grandes ciudades. Dinámicas recientes en México y otros países, Instituto de Geografía de la UNAM/Miguel Ángel Porrúa, México.

Bassols, Mario y Arzaluz, Socorro (2002). "Avatares de la planeación urbana en el DF", en Ciudades, núm. 53, Red Nacional de Investigación Urbana, Puebla, enero-marzo.

Bassols, Mario, coord. (2006). Explorando el régimen urbano en México. Un análisis metropolitano, El Colegio de la Frontera Norte, UAM-Iztapalapa, Plaza y Valdes Editores.

De Mattos A. Carlos (2005). "Gestión territorial y urbana: de la planeación a la governance", en Ciudades, núm. 66, abril-junio de 2005, RNIU, Puebla, México, pp. 2-9

Duhau, Emilio (1994). "Gobierno y gestión de la ciudad de México. Los dilemas de la transición", en Bolívar, Augusto, Coulomb, René y Muñoz, Carmen, coords. Gestión metropolitana y política, Programa de Reencuentro de Dos Ciudades; México-Santiago de Chile/El Cotidiano/UAM-Azcapotzalco, México.

Gómez Tagle, Silvia (2000). "Elección de Jefe de Gobierno, 1997", en Garza, Gustavo, coord. La Ciudad de México en el fin del segundo milenio, Gobierno del Distrito Federal/El Colegio de México, México.

Hernández Vargas, José Gpe. (2006). "Crisis y transformación de formas, estructurales, procesos y mecanismos de gobernabilidad económica global", en Entelequia, Revista Interdisciplinaria, núm.1, <http://www.eumed.net/entelequia>

Hiernaux Nicolas, Daniel (2000). "Hacia una teoría de las ciudades mundiales: un estado de la cuestión", en Rosales, Rocío (coord.), Globalización y regiones en México, PUEC/FCPSyS de la UNAM y Miguel Ángel Porrúa, México.

Hirst, Paul (2000). "Democracy and Governance", en Pierre, Jon, ed. Debating Governance. Authority, Steering and Democracy, Oxford University Press, New York.

Lefèvre Christian (2005). "Gobernabilidad democrática de las áreas metropolitanas. Experiencias y lecciones internacionales para las ciudades latinoamericanas", en Eduardo Rojas et, editores, Gobernar las metrópolis, Banco Interamericano de Desarrollo, Universidad de Alcalá de Henares, pp.195-261

Partida, Virgilio y Anzaldo, Carlos (2004). "Escenarios demográficos y urbanos de la Zona Metropolitana del Valle de México", en Aguilar, Adrián Guillermo, coord. Procesos metropolitanos y grandes ciudades. Dinámicas recientes en México y otros países, Instituto de Geografía-UNAM/Miguel Ángel Porrúa, México.

Pierre, Jon (2000). "Introduction: Understanding Governance", en Pierre, Jon, ed. Debating Governance. Authority, Steering and Democracy, Oxford University Press, New York.

Pradilla Cobos Emilio (2004). "Ciudad de México: los cambios de la privatización de lo urbano", en Ciudades, núm. 64, octubre-diciembre de 2004, RNIU, Puebla, México, pp.57-62

Sánchez, Joan-Eugeni (2005). "¿Qué gobernabilidad? Sistematizar las condiciones de formación metropolitana para abordar las dificultades de comparación de regiones metropolitanas (Reflexión sobre Barcelona)", en Carlos de Mattos, Oscar Figueroa, et. al., Gobernanza, competitividad y redes: La gestión de las ciudades del siglo XXI, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.

Sánchez Mejorada C. y Álvarez Enríquez L. (2006). "Participación y cambios recientes en la relación Gobierno-Sociedad en un gobierno de centro izquierda: el caso de la ciudad de México (1997-200)", en María Soledad Cruz Rodríguez (coord) Espacio Metropolitano, Población, Planeación y Política de Gobierno; Ed. RNIU / UAM, pp.202-246

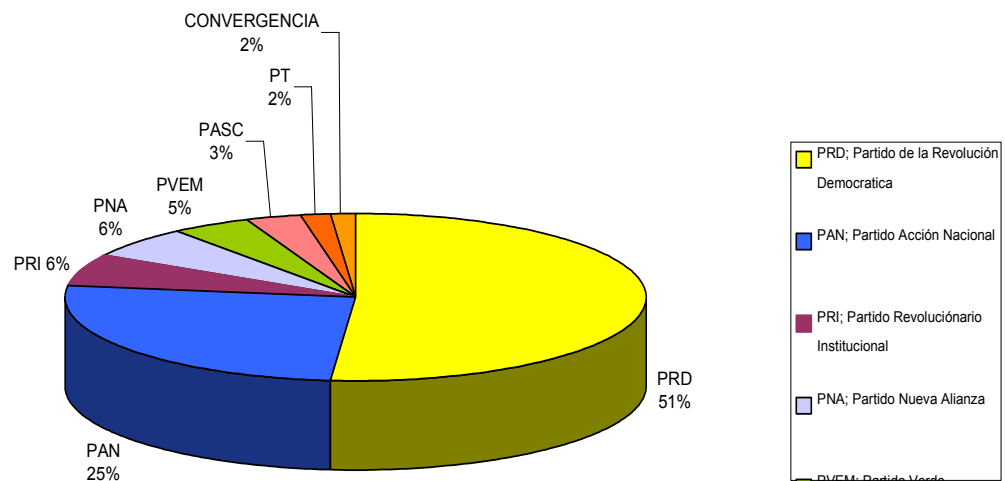
Stone, Clarence (1989). Regime politics: Governing Atlanta, 1946-1988, Lawrence, University Press of Kansas.

Cuadro 1
Miembros de grupos parlamentarios en la ALDF, 2007

Partido	N° Diputados	%
PRD; Partido de la Revolución Democrática	34	51%
PAN; Partido Acción Nacional	17	25%
PRI; Partido Revolucionario Institucional	4	6%
PNA; Partido Nueva Alianza	4	6%
PVEM; Partido Verde Ecologista de México	3	5%
PASC; Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina	2	3%
PT; Partido del Trabajo	1	2%
CONVERGENCIA	1	2%
TOTAL	66	100%

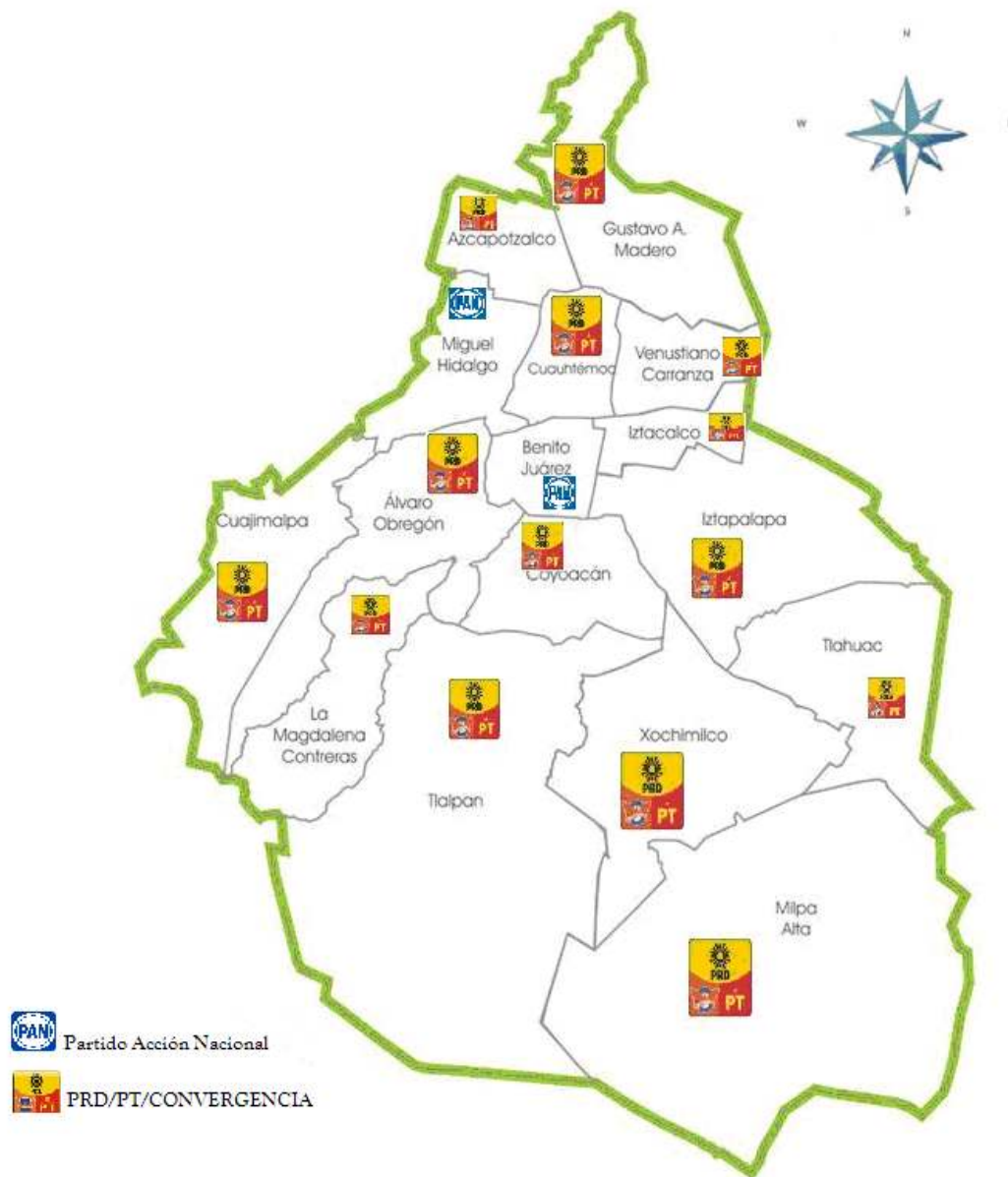
Fuente: http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Asamblea_Legislativa_del_Distrito_Federal

Percentage Members of Parliament groups D.F., 2007



Fuente: http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Asamblea_Legislativa_del_Distrito_Federal

Gobiernos Delegacionales por Partido Político, 2007



Fuente: <http://www.df.gob.mx/delegaciones/>